

Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que en estos autos Rol N° 49.546-2024, caratulados "Luis García Jofré con Superintendencia del Medio Ambiente", sobre reclamación del artículo 17 N° 3 de la Ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en la forma interpuesto por la parte reclamante en contra de la sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Ambiental que, por un lado, rechazó la reclamación interpuesta en contra de la Resolución Exenta N° 1063 dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, con fecha 20 de junio de 2023, en virtud de la cual se rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la Resolución Exenta N° 2212 de fecha 15 de diciembre de 2022 que le impuso dos multa, que en total ascienden a 32 Unidades Tributarias Anuales y, por otro, adoptó de oficio las medidas cautelares innovativas que indica, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N° 20.600.

Segundo: Que en el arbitrio de nulidad formal se sostiene, por una parte, que la sentencia fue pronunciada omitiendo cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley N° 20.600, en relación con el artículo 170 numerales 4° del Código de Procedimiento



Civil. Ello en lo que se refiere a las consideraciones de hecho y de derecho que debió haber tenido, y que no contiene dicho fallo.

Sostiene que dentro de los capítulos de impugnación de la Reclamación del art. 17 N°3 Ley N°20.600 se argumentó en la letra c la infracción del deber de fundamentación en lo que dice relación con el momento de producirse las actividades imputadas al reclamante, pues se cuestionó por su parte la afectación del Santuario en tanto los contratos se verificaron antes de su declaración como tal, alegación que fue rechazada sobre la base de establecer como inicio de elusión al SEIA el 14 de noviembre de 2017, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial el Decreto N° 30/2017 que declara el SNQC. Así, en los elementos de juicio que se tienen en cuenta para la acreditación de la infracción son consideradas acciones evidenciadas con fecha 15 de julio de 2010, 16 septiembre de 2015 y 22 de junio de 2016 respecto del vertedero y 14 de agosto de 2014. Lo que, además, constituye una infracción a las reglas de la sana crítica.

Indica que el Tribunal no procede a analizar cuál es la ponderación de los antecedentes efectuados por la SMA al analizar los argumentos expuestos en la reposición por el reclamante, sino que procede a reemplazar la fundamentación omitida por el ente administrativo con



antecedentes que no fueron considerados por aquel. Lo que implica que pasa a arrogarse las competencias del ente examinado, determinando los antecedentes probatorios que permitirían a juicio del tribunal, la imposición de una sanción en clara contraposición con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 20.600 y artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, como segundo vicio formal, alega que el fallo incurrió en la causal de casación prevista en el artículo 768 N° 4 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 26 inciso cuarto de la Ley N° 20.600, esto es, extrapetita, al decretar las medidas cautelares innovativas de oficio, pues las mismas no comparten verdaderamente la naturaleza jurídica de cautelares sino que implican verdaderas medidas de mitigación impuestas al margen de un procedimiento en el que se debata su procedencia y alcance, dándole plena vigencia al principio de bilateralidad de la audiencia.

Cuarto: Que, para explicar cómo los vicios denunciados han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, menciona que si no se hubiera incurrido en el primer vicio denunciado, haciéndose cargo de la falta de fundamentación de la resolución impugnada, el tribunal habría acogido el tercero de los argumentos esgrimidos en la reclamación y; en relación con el vicio de extrapetita no se ha respetado uno de los principios



básicos del procedimiento civil, como es el principio de congruencia procesal, prohibición de reforma en perjuicio y competencia funcional sin cuya infracción tales medidas no habrían sido ordenadas.

Quinto: Que, en relación a la primera causal esgrimida, para determinar la procedencia del argumento en que se sustenta la impugnación pretendida por la recurrente, es preciso señalar que, según se ha expresado en torno a la causal alegada, el vicio aludido sólo concurre cuando la sentencia carece de fundamentos fácticos o jurídicos que le sirvan de sustento, es decir, cuando no se desarrollan los razonamientos que determinan el fallo o se omiten las normas legales que la expliquen, requisitos que son exigidos a las sentencias por la claridad, congruencia, armonía y lógica que deben observar en sus razonamientos.

Sexto: Que, en este contexto y de la confusa exposición que realiza el recurrente al efecto -que acusa por un lado falta de fundamentación y por otro lado, infracción a la sana crítica, que en todo caso no precisa ni desarrolla argumentativamente-, aparece del arbitrio en estudio, que el mismo se limita a cuestionar una supuesta falta de análisis del Tribunal al momento de ponderar los antecedentes expuestos por la SMA cuando revisa los argumentos contenidos en la reposición del reclamante, afirmando que el tribunal procede a



reemplazar la fundamentación omitida por el ente administrativo con antecedentes que no fueron considerados por aquel; circunstancias que, además de no configurar la causal esgrimida no resultan efectivos.

En efecto, la sentencia impugnada dedica el primer capítulo de la decisión de la controversia a la "eventual infracción al deber de fundamentación de la resolución reclamada", haciéndose cargo de los reproches efectuados por el reclamante, esto es, por un lado 1) respecto de la falta de titularidad del proyecto y, por otro, aquel que identifica como 2) Hito de inicio de la infracción de elusión al SEIA.

Concluyendo en relación al primer reproche en el considerando trigésimo primero que *"...a juicio del Tribunal, a partir de los antecedentes que obran en el expediente, se encuentra debidamente acreditado que, una vez que terminaron la vigencia de los contratos de arrendamiento suscritos con los municipios de El Quisco y Algarrobo, no habiéndose reconocido otro titular distinto, el señor Luis Alejandro García Jofré continuó ejecutando actividades de acopio, disposición y acumulación de materiales vegetales, inorgánicos como metales, plásticos y desechos domiciliarios en el Vertedero El Totoral, sin que éste, en razón de su calidad de dueño del predio, haya ejercido acciones para cesar completamente en el ejercicio de dichas*



actividades, como asimismo evitar que el terreno fuera usado como vertedero por terceros. Ello, permite descartar que las actividades por las cuales resultó sancionado no le resulten imputables en calidad de titular, más aún cuando no acompañó antecedentes que permitieran sustentar sus dichos y mucho menos desvirtuar los hechos constatados por la SMA y la titularidad del proyecto. De esta forma, la alegación del reclamante será desestimada."

En tanto que, en relación al segundo reproche afirman a partir del motivo cuadragésimo cuarto que "Por consiguiente, teniendo en consideración lo preceptuado en dicha norma legal, los antecedentes que constan en el expediente y lo razonado tanto en la resolución sancionatoria como en la reclamada en autos, para estos sentenciadores resulta claro que la fecha que la SMA consideró como hito de inicio de la infracción de elusión al SEIA, fue el 14 de noviembre de 2017, es decir, a partir de la publicación del Diario Oficial del acto declaratorio del SNQC, fecha en la cual el reclamante mantenía la calidad de propietario del predio en que se emplaza el Vertedero El Totoral y se seguían ejecutando actividades de acopio, disposición y acumulación de restos vegetales, escombros y demás desechos inorgánicos depositados en el predio, sin que existieran nuevos contratos de arrendamiento suscritos con terceros".



Conclusión a la que arriban los sentenciadores, conforme dejan expresa constancia los sentenciadores -muy al contrario a lo que sostiene el recurrente, "teniendo en consideración los antecedentes que constan en el expediente y lo razonado tanto en la resolución sancionatoria como en la reclamada en autos..".

Añaden a sus argumentos que "...estos sentenciadores estiman que la resolución reclamada no infringe las reglas de la lógica, pues no se evidencia en el acto reclamado una falta de coherencia entre la premisa y la deducción que sustenta la conclusión a la que se arriba, ni al razonamiento probatorio efectuado en ella, encontrándose revestida de una adecuada fundamentación. En efecto, como ha quedado de manifiesto, si bien la SMA aludió a ciertas fechas de inicio de ejecución de algunas actividades que son previas a la declaratoria del SNQC, resulta claro que luego para configurar la infracción de elusión tuvo como hito de inicio de la misma la fecha en que se publicó en el Diario Oficial el acto declaratorio del Santuario de la Naturaleza. De ello se sigue que las acciones iniciadas antes de esa fecha, no fueron utilizadas por la reclamada para fundar el cargo formulado ni determinar el monto de la sanción aplicada, sino solo como un antecedente de contexto para aludir a que se trató de actividades de ejecución sostenida en el tiempo, dejando plasmado en su razonamiento y elementos



de juicio que la infracción de elusión se configuró a partir del 14 de noviembre de 2017 y no antes, lo que permite desestimar la existencia de una infracción al deber de fundamentación de la resolución reclamada, de manera que la presente alegación será desestimada."

Séptimo: Que, de los pasajes transcritos, se desprende que los hechos esgrimidos para fundar la causal, no la constituyen, pues aquellas consideraciones que el recurrente denuncia como omitidas existen, sin perjuicio de su eventual disconformidad o desagrado con el resultado del razonamiento de los jueces ambientales.

Octavo: Que, en lo tocante a la segunda causal esgrimida como fundamento del recurso de nulidad formal en examen, basta con identificar que el artículo 24 de la Ley N° 20.600 faculta al tribunal para actuar de oficio, atribución que, por sí misma, permite descartar el vicio alegado.

En efecto, el texto de la referida norma dispone en su inciso 1°: *"De las medidas cautelares. Con el fin de resguardar un interés jurídicamente tutelado y teniendo en cuenta la verosimilitud de la pretensión invocada, el Tribunal podrá decretar las medidas cautelares, conservativas o innovativas, necesarias para impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidos a su conocimiento. Son medidas conservativas aquellas que tengan por objeto asegurar el resultado de la pretensión,*



a través de acciones destinadas a mantener el estado de hecho o de derecho existente con anterioridad a la solicitud de la medida. Son innovativas aquellas que, con el mismo objeto, buscan modificar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de la solicitud de la medida". Acto seguido, el inciso 2° de la misma regla expresa: *"El Tribunal podrá decretar estas medidas en cualquier estado del proceso o antes de su inicio y por el plazo que estime conveniente. Podrá decretarlas de oficio o a petición de parte, según corresponda, de acuerdo a las normas generales, debiendo en este último caso resolver mediante resolución fundada, sea de plano o con citación".*

Noveno: Que, por lo expuesto, ante las falencias insoslayables en que incurre el recurso de casación en la forma solo resta declararlo inadmisibile, puesto que no se configuran los vicios que en él se denuncian.

De conformidad asimismo con los artículos 766, 767 y 781 del Código de Procedimiento Civil, se declara **inadmisibile** el recurso de casación en la forma impetrado por el reclamante Luis García Jofré, en contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 49.546-2024.





Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Jean Pierre Matus A., Diego Gonzalo Simpertigue L., María Soledad Melo L. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Andrea Paola Ruiz R. Santiago, siete de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a siete de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

